

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE : MARICELA GÓMEZ CARDONA
DEMANDADO : FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
LITISCONSORTE NECESARIO: JOSÉ MANUEL ORTIZ ATEHORTÚA y COMPAÑÍA DE SEGUROS VIDA ALFA SA
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL : 05-001-31-05-008-2018-0476-01
RADICADO INTERNO : 010-23
DECISIÓN : CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO : 046

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

Pretende la parte accionante se DECLARE que en su condición de compañera permanente y esposa del Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango, tiene derecho a la pensión de sobreviviente por haber cumplido con los requisitos legales para su reconocimiento.

Se CONDENE a la sociedad Porvenir S.A. a reconocer y pagar a la demandante, las mesadas comunes y especiales que le corresponden en calidad de beneficiaria de la pensión de sobreviviente; al pago de los intereses moratorios; la indexación; y las costas procesales.

Como supuestos facticos con los que sustenta sus pretensiones, expuso que el Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango cotizó a la sociedad Porvenir S.A. desde el mes de septiembre de 2000 hasta julio de 2015, un total de 371 semanas; los señores Enrique Alonso Ortiz Arango y Maricela Gómez Cardona luego de un corto noviazgo, iniciaron convivencia marital de hecho de dos años a partir de enero de 2011, tiempo en el que fueron compañeros permanentes, conviviendo y compartiendo techo, lecho y mesa; el 16 de diciembre de 2013 reafirmaron su unión, contrayendo matrimonio católico y la convivencia como cónyuges se dio hasta el 2 de octubre de 2017, fecha del fallecimiento del afiliado. Manifiesta que durante el tiempo del noviazgo, el Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango no la tuvo afiliada a la seguridad social porque ambos trabajaban, cuando la demandante quedó desempleada, el causante inició los trámites para afiliarla en calidad de beneficiaria en calidad de cónyuge; en declaración extrajuicio del 19 de enero de 2015, el Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango manifestó que la Sra. Lina Marcela Atehortúa García (madre de su hijo menor) y su hijastra Yuleidy García Atehortúa no hacían parte de su núcleo familiar hacía 4 años atrás. Con la prueba aportada se prueba que los señores Enrique Alonso Ortiz Arango y Maricela Gómez Cardona convivieron 6 años en forma continua e ininterrumpida, de los cuales, 2 años como compañeros permanentes y 4 años como cónyuges, superando los 5 años de convivencia exigidos por la ley y adicional a ello, se acreditan 50 semanas al fallecimiento del afiliado.

La demandante radicó ante Porvenir S.A. solicitud de pensión de sobreviviente, un mes después del fallecimiento, la cual fue negada en comunicación del 22 de diciembre de 2017, argumentando que la convivencia de la pareja fue durante 4 años tomando solo el tiempo del matrimonio y desconociendo los 2 años de convivencia como compañeros permanentes previos al matrimonio; la reclamación administrativa fue agotada según comunicado del 25 de enero de 2018; y señala que el Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango le sobrevive un hijo extramatrimonial llamado José Manuel Ortiz Atehortúa.

CONTESTACIONES A LA DEMANDA

La sociedad PORVENIR SA en su contestación a la demanda se opuso a las pretensiones de la demanda. En relación a los hechos de la demanda, acepta que el Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango se afilio a la sociedad

Horizonte hoy Porvenir S.A. el 20 de octubre de 2003 pero se atiende a las semanas cotizadas acreditadas; la fecha en que la demandante contrajo matrimonio con el causante, pero no le consta la convivencia y el tiempo de la relación por ser un tema personal; acepta la fecha de fallecimiento del afiliado; que el Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango estaba afiliado a Porvenir S.A. y cumplió el requisito de las 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores al fallecimiento, por lo que la pensión de sobreviviente fue reconocida al hijo menor José Manuel Ortiz Atehortúa en un 100%; cierto que la demandante radicó la solicitud de pensión de sobrevivientes. Sostiene que no es cierto, que el afiliado haya cotizado desde septiembre de 2000 hasta julio de 2015, porque en el historial de vinculaciones reposa que se afilió a Horizontes hoy Porvenir S.A., desde el 20 de octubre de 2003 a julio de 2016. Las afirmaciones relacionadas a la prueba de los 5 años de convivencia y la negación de la prestación económica a la demandante, considera que no son hechos sino apreciaciones, advirtiendo que para el momento del fallecimiento del Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango, la demandante tenía 29 años de edad, por lo que, en el evento de declararse el derecho pensional a la demandante, solo procedería temporalmente. Frente a los demás hechos de la demanda, sostiene que no le constan.

Propuso como excepciones previas, la de falta de integración de la litis por pasiva, y como excepciones de mérito, las de falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación, buena fe, cobro de lo no debido, pago, compensación, prescripción, incompatibilidad entre indexación y los intereses moratorios reclamados y la genérica (fls. 91 a 95 del expediente digital 02).

En los autos del 14 de agosto de 2018, 22 de noviembre de 2018 se ordenó citar al menor José Manuel Ortiz Atehortúa en calidad de interviniente excluyente y se ordenó notificar a la Sra. Lina Marcela Atehortúa García en calidad de madre del menor y en representación del mismo (fl. 46 a 47 y 71 del expediente digital 02) y en auto del 14 de febrero de 2019 se ordenó citar al menor en calidad de litisconsorte necesario en virtud de la excepción previa propuesta por Porvenir S.A., al haberse reconocido la pensión de sobreviviente en un 100% al menor (fl. 133 y 134)

En la contestación de la demanda, el menor José Manuel Ortiz Atehortúa, representado por la Sra. Lina Marcela Atehortúa García,

expuso que es cierto que el causante era cotizante de Porvenir S.A.; que los señores Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango y Maricela Gómez Cardona contrajeron matrimonio el 16 de diciembre de 2013; la reclamación elevada por la demandante; que al causante le sobrevive el hijo menor José Manuel Ortiz Atehortúa. No le consta lo relativo a la afiliación a seguridad social de la demandante ni la declaración extrajuicio. No acepta los demás hechos de la demanda aclarando que los señores Enrique Alonso Ortiz Arango y Lina Marcela Atehortúa García tuvieron una relación hasta inicios del año 2012 y el ultimo domicilio como pareja fue en el barrio Manrique, posteriormente el causante se trasladó al Barrio 12 de octubre y allí habitó hasta que contrajo matrimonio con la Sra. Maricela Gómez Cardona. Como excepciones propuso las de inexistencia del derecho (fl. 137 a 140 expediente digital 02).

La sociedad PORVENIR solicitó la integración del contradictorio por pasiva, a la Compañía de Seguros Vida Alfa S.A (fl. 173 y 174), el juzgado de conocimiento por medio de auto del 16 de julio de 2019 ordenó vincularla al proceso (fls. 185 y 186 del expediente digital 02). La entidad **en su contestación de la demanda** se opuso a las pretensiones de la demanda. Frente a los hechos de la demanda acepta que el Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango tiene un hijo. No le constan los demás hechos de la demanda. Como excepciones propuso las de falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas y prescripción (expediente digital 07).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 28 de septiembre de 2022, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín ABSOLVIÓ a Porvenir S.A., al menor José Manuel Ortiz Atehortúa (representado por la Sra. Lina Marcela Atehortúa García) y a la Compañía de Seguros Vida Alfa S.A, de las pretensiones formuladas por la demandante. CONDENÓ en costas a la parte demandante.

IMPUGNACIÓN

La apoderada de la parte demandante, solicita sea revocada la sentencia y se reconozca a la demandante como beneficiaria de la pensión de sobreviviente, argumentando que después de 6 años de convivencia con el Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango, aproximadamente, culminó la convivencia por un accidente de tránsito donde ambos fueron colisionados y donde la

demandante salió gravemente herida, y fue sometida a intervenciones quirúrgicas y tratamientos hasta el día de hoy; que al momento de la muerte de su esposo, la demandante no trabajaba y el esposo era el único soporte económico del hogar; además de padecimiento físicos, la demandante se encuentra en tratamiento psicológico debido al accidente y a la pérdida de su cónyuge. Sostiene que el Sistema de Seguridad Social Integral, propende por la obtención de las condiciones de vida dignas cubriendo las contingencias que afectan a las personas y en este caso la demandante, el accidente acabó con la vida de su esposo sino con tiene una pena moral que aún no supera y lo mínimo que espera es que el Sistema de Seguridad Social la ampare.

Señala que los hechos ocurrieron el 12 de octubre de 2017 y el proceso se radicó en el año 2018, desde esa fecha han transcurrido 4 años, por lo tanto, no es posible que las personas recuerden en detalle los hechos y la demandante por su afectación emocional, no fue contundente para precisar la fecha en la que inicio su noviazgo y convivencia, pero en los hechos de la demanda se dijo que pudo ser por una o dos semanas. Que no se puede desconocer 2 años de convivencia por no haberse podido establecer si fue de una o dos semanas, pero según el dicho de la demandante, el amor que sentía por su esposo fue a primera vista; asegura que la pareja compartió 6 años, pero la ley se someten a lo que declaren otras personas que no estuvieron en su intimidad; considera que existe animadversión, en la declaración de la Fanny Arango (suegra) al negar la convivencia de 2 años antes del matrimonio y afirmar que conoció a la demandante después del matrimonio, posiblemente con el interés de favorecer a su nieto, el cual percibe el 100% de la pensión.

Invoca al doctrinante Carlos Buitrago Chávez, en relación a la verdad material y la verdad procesal que existe en los procesos. Y sustenta su apelación en la sentencia SL 820 de 2022 que remitió la sentencia SL 1730 de 2020.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de la parte demandante solicita el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a su poderdante, pues si bien no se pudo

demostrar una convivencia con anterioridad al matrimonio, solicita se tenga en cuenta la sentencia SL 1730 de 2020.

La apoderada de Seguros de Vida Alfa S.A solicita que la sentencia sea ratificada dado que con las declaraciones aportadas no se acredita el termino mínimo de convivencia al demostrar que el causante antes del año 2013 vivía con su madre en el Barrio Doce de Octubre y de ello dio cuenta la vecina María Eugenia Varela Patiño, la cual narró que a mediados del año 2012 el causante le puso una demanda por el ruido ocasionado que no le permitía dormir, además indicó dicha testigo que cuando el causante le puso la demanda en el año 2012 se había separado recientemente de la Sra. Lina y 6 meses después de la denuncia, el causante se casó y se fue a vivir a Robledo. Señala que dicha declaración cobre veracidad con el acta de conciliación de la Inspección de Policía aportada en donde consta el estado civil soltero del afiliado fallecido y la dirección de residencia era la de su madre.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico se centra en determinar si la Sra. Maricela Gómez Cardona tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente.

No es objeto de discusión que los señores Enrique Alonso Ortiz Arango y Maricela Gómez Cardona contrajeron matrimonio el 16 de diciembre de 2013 según el registro civil de matrimonio expediente digital 03 anexos; el afiliado falleció el 2 de octubre de 2017 según el registro civil de defunción del expediente digital 03 anexos; por medio de comunicación del 27 de noviembre de 2018, fue reconocida la pensión de sobreviviente al menor José Manuel Ortiz Atehortúa, en calidad de hijo del causante (fl. 126 del expediente digital 02).

1. De los requisitos de la convivencia

En el presente caso, se tiene claro que al haber fallecido el Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango el 2 de octubre de 2017, la normatividad aplicable al caso concreto es el art. 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 13 de la L. 797 de 2003, el cual señala que:

“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos **de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte...**”
(Negrilla fuera del texto)

Esta Sala es de la posición, que cuando se trata de muerte de un afiliado o de un pensionado, el cónyuge con sociedad conyugal vigente debe acreditar **cinco años** de convivencia en cualquier tiempo, en aplicación de lo considerado por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en sentencias SU 453 de 2019, y radicado 41.637 y 45.038 de 2012.

Y frente a la muerte de un afiliado o pensionado, la compañera permanente debe de acreditar una convivencia de 5 años con anterioridad a la muerte de aquel, a la luz de las sentencias SL 1399 de 2018, en la que se plasmó:

“2.3 La convivencia es un requisito exigible tanto en la hipótesis de muerte del pensionado como del afiliado

En sentencia SL 32393, 20 may. 2008, reiterada en SL793-2013 y SL1402-2015, la Corte explicó que a pesar de que el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, alude al «pensionado», el requisito de la convivencia durante 5 años es exigible también ante la muerte del «afiliado», pues el artículo 12 de la citada ley «conservó como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, indistintamente, a ‘los miembros del grupo familiar’ del pensionado o afiliado fallecido», motivo por el cual no existe un principio de razón suficiente para establecer diferencias fundadas exclusivamente en una u otra calidad. Además, el requisito de la convivencia o comunidad de vida es el elemento central y estructurador del derecho, en la forma descrita a continuación.

Aunado a lo anterior, la posición que ha venido sostenido esta Sala encuentra igualmente sustento, en la reciente sentencia de unificación 149 de 2021, en donde **se dejó sin efectos la sentencia SL 1730 del 3 de junio de 2020**, y se le ordenó a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia adoptara el nuevo fallo “*en la cual observe el precedente adoptado por la Corte Constitucional, en el sentido de que, en los términos del artículo 47, literal a) de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, la convivencia mínima requerida para ostentar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, tanto para el cónyuge como para el compañero o la compañera permanente, es de cinco*

(5) años, independientemente de si el causante de la prestación es un afiliado o un pensionado”.

La anterior decisión, al considerar la Corte Constitucional que la sentencia del órgano de cierre de la justicia ordinaria laboral incurrió en primer lugar, en una violación directa de la Constitución al desconocer los principios de igualdad y de sostenibilidad financiera del sistema pensional; en segundo lugar, desconoció el precedente de la Corte Constitucional; y en tercer lugar, existió defecto sustantivo por interpretación irrazonable del precepto legal.

Acto seguido, la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia SL 4318 de 2021, por medio de la cual dio cumplimiento a la sentencia SU 149 de 2021 y casó la sentencia de segunda instancia que reconoció la prestación económica a la interviniente ad excludendum, en calidad de compañera permanente del afiliado fallecido en un 50%, resaltando la Corte en esta oportunidad, que en los términos de la sentencia de unificación, la reclamante necesitaba demostrar una convivencia de 5 años con anterioridad a la muerte del afiliado y el A Quo había incurrido en un error jurídico al haber ordenado el reconocimiento con 3 años de convivencia.

Con base en lo anterior, es claro que a la Sra. Maricela Gómez Cardona le correspondía demostrar una convivencia con la afiliada fallecida de 5 años, y después de ser valorada en su conjunto con base en las reglas de la **sana crítica y la libre formación del convencimiento** (art. 61 del CPL), se permite la Sala concluir que para el presente caso no se cumple el requisito de la convivencia para el reconocimiento de la prestación económica solicitada por las siguientes razones:

1º. En **declaración extrajuicio** rendida por el actor bajo la gravedad del juramento, el 19 de enero de 2015 por el Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango, aseguró que la Sra. Lina Marcela Atehortúa García y Yuleidy García Atheortua, no pertenecían a su grupo familiar y no dependían económicamente del causante hacía 4 años aproximadamente y era su voluntad desvincularlas de la EPS (expediente digital 03).

Oportunidad en que nada informó de la convivencia con la Sra. Maricela Gómez Cardona, en fecha anterior al matrimonio.

2º. Las señoras Martha Bercelay Serna Olarte y Claudia Patricia Manrique Henao, en **declaración extrajuicio** rendida el 4 de noviembre de 2017, aseguraron que los señores Enrique Alonso Ortiz Arango y Maricela Gómez Cardona convivieron desde enero de 2011 bajo el mismo techo en unión marital de hecho por 2 años y luego se casaron el 16 de diciembre de 2013, convivencia que duró hasta la muerte del afiliado; que el causante tenía un hijo menor de edad de nombre José Manuel Ortiz Atehortúa (expediente digital 03).

Y en el **interrogatorio de parte** absuelto por la accionante, indicó haber conocido al Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango en enero de 2011; fueron novios poco tiempo, aproximadamente 2 semanas y se fueron a convivir juntos en Barbosa, en la casa de sus abuelos; el 16 de diciembre de 2013 contrajeron matrimonio e iniciaron convivencia en Robledo. Desde el año 2011, cuando no dormían en la casa de los abuelos era porque amanecían en la casa la Sra. Fanny (madre del causante) y cuando no amanecían donde la Sra. Fanny, amanecían en la casa de los abuelos y así la pasaban. Dijo que la empresa para la cual trabajaba el Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango cuando ingresó al Jardín de preescolar donde se conocieron, era la empresa de vigilancia Fortos.

Afirmaciones que no lograron ser acreditadas con la prueba testimonial aportada por la parte demandante, toda vez que el **testigo Julio Cesar Salazar Montoya (amigo y vecino del causante en el Barrio Doce de Octubre)** manifestó haber perdido contacto con el Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango debido al servicio militar que el testigo prestó y volvieron a tener contacto en el año 2001 o 2012, oportunidad en que se encontraban en el Barrio Doce de Octubre, se saludaban y lo veía en la casa de la mamá; en el año 2011 o 2012 conoció a la demandante pero aclaró que no siempre veía al causante con la Sra. Maricela Gómez Cardona. Que llegó a visitar la casa de la mamá de Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango en una o dos oportunidades, y en esos eventos no estaba la Sra. Maricela Gómez Cardona. Dijo el testigo, haber tendido un cargo administrativo en la empresa Portos Seguridad y en el año 2013 el causante lo buscó para solicitarle empleo, y debido a su cargo, le dio la posibilidad al causante de trabajar en esa empresa; que antes del año 2013 el Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango no había trabajado en la empresa Portos Seguridad; y estando el

causante trabajando para la empresa Portos Seguridad, el testigo pudo evidenciar que la pareja era la demandante.

Del anterior testimonio, además de ser contundente, que se trata de un testigo de oídas, dado que no tiene conocimiento directo de la convivencia de los señores Enrique Alonso Ortiz Arango y Maricela Gómez Cardona desde el año 2011 hasta el día del matrimonio que lo fue el 16 de diciembre de 2013, también encuentra la Sala contradicciones, toda vez que en un inicio aseguró, que tiene conocimiento que la convivencia de los señores Enrique Alonso Ortiz Arango y Maricela Gómez Cardona fue desde el año 2011 porque el causante se lo contaba, pero posteriormente, cuando se le preguntó si el afiliado fallecido le había manifestado que convivía con la demandante, indicó que no le había manifestado si vivía con la demandante y que el testigo no le había preguntado si vivía con ella, simplemente le dijo que tenía a Maricela como pareja, y después del matrimonio fue evidente que estaban juntos.

También, existe contradicción entre este testigo y la Sra. Maricela Gómez Cardona, pues el primero indica que le ayudó a su amigo a entrar a trabajar a la empresa Portos Seguridad en el año 2013 y antes de esa fecha, el causante no trabajó allá, no obstante, la demandante informó que para el año que conoció a su cónyuge (año 2011), éste trabajaba en dicha empresa. Lo que lleva a preguntarse la Sala, ¿realmente los señores Enrique Alonso Ortiz Arango y Maricela Gómez Cardona se conocieron en el año 2011, o se conocieron en el año 2013 cuando el testigo ayudó al Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango a ingresar en la empresa Fortos Seguridad?

Siguiendo con el análisis de la prueba testimonial, la **Sra. Ana Rosa Arango Vélez (tía del causante)**, a pesar de sostener la existencia de la convivencia de los señores Enrique Alonso Ortiz Arango y Maricela Gómez Cardona, pero dijo que nunca los visitó cuando presuntamente convivieron en Barbosa, también se trata de una testigo sospechosa, pues recuerda que la convivencia del causante y Maricela Gómez Cardona fue del 2011 a 2013 en Barbosa y a partir del 2013 en Robledo, sin embargo, no recuerda fechas de la convivencia del causante con la Sra. Lina Marcela Atehortúa García (madre del hijo José Manuel Ortiz Atehortúa). Además, no tuvo conocimiento de un conflicto que tuvo el causante con una vecina en el año 2011 o 2012, a sabiendas que dicha vecina María Eugenia Varela Patiño (traída como

testigo a este proceso, por la Sra. Lina Marcela Atehortúa García), informó que el Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango vivió en la casa de su madre y la citó a la inspección de policía **a mediados del año 2012** por problemas de ruido y no lo dejaban dormir, que a los 6 meses de haberla citada a la inspección de policía, el causante se casó y se fue.

Así mismo, el dicho de la testigo María Eugenia Varela Patiño encuentra sustento, con la citación a la Inspección de Policía donde se acreditada que los señores Enrique Alonso Ortiz y María Eugenia Varela Patiño hicieron una conciliación **el 12 de julio de 2012, debido a la queja realizada por el Sr. Enrique Alonso Ortiz Arango ante el volumen del equipo de sonido**, la cual reposa a fl. 146 del expediente digital 02.

3º. Contrario a lo anterior, la Sra. Lina Marcela Atehortúa García en representación de su hijo José Manuel Ortiz Atehortúa, llamó como testigo a la madre del causante, Sra. Fanny Arango Vélez, quien indicó que su hijo y la Sra. Maricela Gómez Cardona contrajeron matrimonio el 16 de diciembre del 2013; con anterioridad a esa fecha, la pareja no convivía bajo el mismo techo porque su hijo vivió con ella (su madre) hasta el día del matrimonio; afirmó que la relación de su hijo con la Sra. Lina Marcela Atehortúa García finalizó a finales del año 2012, oportunidad en que se fue a vivir con ella (con su madre) hasta que se casó en el año 2013. Que los señores Enrique Alonso Ortiz Arango y Maricela Gómez Cardona iniciaron una relación finalizando el año 2012 o a mediados de 2013.

La anterior declaración, es confirmada por la Sra. María Eugenia Varela Patiño (vecina de la madre del causante), quien sostuvo que vive al lado de la casa de la Sra. Fanny Arango Vélez desde el año 2004; que el causante era soltero, vivía con la Sra. Lina, tuvieron un hijo, luego se separó de ella y el causante se fue a vivir donde la mamá; y a mitad del año 2012, el Sr. Enrique Alonso Ortiz le puso una demanda por el ruido a la testigo.

4º. Otra de las pruebas por las cuales se concluye la inexistencia de la convivencia de los señores Enrique Alonso Ortiz y Maricela Gómez Cardona, es con base en el acta de conciliación adelantada en la Inspección de Policía enunciada anteriormente, donde el causante precisó que para **el 12 de julio de 2012**, su estado civil era soltero y residía en la Carrera 82D 104c-24,

dirección que corresponde a la de la residencia de su madre Fanny Arango Vélez (fl. 146 del expediente digital 02).

Debiendo ser valorada esta prueba bajo el entendido, que para el mes de julio de 2012 el actor no convivía con la accionante en el Municipio de Barbosa.

5º. Finalmente, en la hoja de vida diligenciada por el Sr. Enrique Alonso Ortiz el **8 de abril de 2013** y en la solicitud de empleo y/o actualización de datos ante la empresa Fortox Security Group diligenciado el **19 de abril de 2013** (ello es, 4 meses antes de contraer matrimonio los señores Enrique Alonso Ortiz y Maricela Gómez Cardona), el causante plasmó como lugar de residencia la Carrera 82D 104c-24 ubicada en el Barrio Doce de Octubre, dirección que corresponde a la de la residencia de su madre Fanny Arango Vélez; manifestó que su estado civil era soltero; como información familiar solo reportó a su hijo, sus padres y su hermana, y la Sra. Maricela Gómez Cardona la presentó como referencia personales (fls. 151 a 157 del expediente digital 02)

Del anterior recuento se puede concluir, que las pruebas documentales y las declaraciones aportadas son coherentes y dan credibilidad a la Sala, que para el año 2011-2012, los señores Enrique Alonso Ortiz Arango y Maricela Gómez Cardona no iniciaron una convivencia, lo que da lugar a CONFIRMAR la sentencia absolutoria de primera instancia, al no haber quedado demostrada la convivencia de los señores Enrique Alonso Ortiz Arango y Maricela Gómez Cardona por 5 años, y solo acreditó la convivencia desde el 16 de diciembre de 2013 al 2 de octubre de 2017, ello es, por 3 años 9 meses y 16 días aproximadamente.

Costas en esta instancia, a cargo del demandante a favor de Porvenir S.A., en la suma de \$580.000, por no haber salido avante el recurso interpuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR, la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDA: Costas en esta instancia, a cargo del demandante a favor de Porvenir S.A., en la suma de \$580.000, por no haber salido avante el recurso interpuesto.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

Radicado Único Nacional 05-001-31-05-008-2018-0476-01
Radicado Interno 010-23



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: MARICELA GÓMEZ CARDONA
DEMANDADO :	: FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
LITISCONSORTE NECESARIO:	JOSÉ MANUEL ORTIZ ATEHORTÚA y COMPAÑÍA DE SEGUROS VIDA ALFA SA
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-008-2018-0476-01
RADICADO INTERNO	: 010-23
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 17 de julio de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 17 de marzo de 2023 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO